

C.A. de Santiago

Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

Ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se sustanció esta causa RIT O – 6822 - 2019, caratulada “Jara con Casa de Moneda de Chile S.A.”, sobre despido injustificado y cobro de prestaciones.

Por sentencia definitiva de veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, la jueza de la causa acoge la demanda, declarando improcedente el despido de que fue objeto el actor, y condenando a la demandada al pago del recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicios, y a la devolución del descuento efectuado sobre esta indemnización por concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía, con costas.

Contra este fallo la demandada dedujo recurso de nulidad, invocando las causales del artículo 478 b) y 477 del Código del Trabajo, en la manera y con las relaciones normativas que se explicitarán en lo considerativo, pidiendo, respecto de ambas causales, que se acoja el recurso, invalidando el fallo, dictando sentencia de reemplazo que rechace la demanda, o, en su caso, se rechace la devolución del descuento de AFC pretendido, eximiendo a la demandada del pago de las costas.

El recurso fue declarado admisible, procediéndose a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de las partes.

**Y considerando:**

**Primero:** Que, la demandada, como causal principal, invoca la del artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, por infracción manifiesta de las normas de apreciación de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, específicamente el principio de no contradicción y las máximas de la experiencia.

Explica que el fallo, en sus considerandos quinto y sexto, tiene por acreditada la situación financiera mermada de la demandada, la pérdida de negocios, que se invocó en la carta de despido la pérdida



de ventas de revisiones técnicas, que desde el año 2018 ha sufrido una merma en sus ingresos, lo que supuso la desvinculación del actor y de varios trabajadores, afectando a todas las áreas de la producción, principalmente técnicos, pero también gerentes y supervisores; no obstante lo cual el fallo concluye que el despido del actor es improcedente, fundado en que: *“La postulación fáctica del despido en que se ampara la desvinculación, es genérica, ya que la “única circunstancia fáctica específica en la cual se ampara la misiva de desvinculación se circunscribe a la pérdida del negocio consistente en las plantas de revisión técnica, negocio en el cual el actor no tenía mayor participación”.*

Argumenta que este razonamiento infringe el principio lógico de no contradicción, ya que posteriormente el mismo fallo señala que *“la misiva hace alusión a la pérdida de ciertos contratos”* y que, si bien *“no obran en la misiva de desvinculación”*, sí se trataría de *“pérdida de contratos del departamento de acuñación de monedas, en orden a que se habrían perdido contratos con Brasil y Finlandia respecto de tal departamento”*, de forma tal que no se puede hablar de argumentos genéricos si se reconoce que se ha especificado en la carta, y luego acreditado, la pérdida de un contrato relevante, la pérdida de otros contratos, del área del actor, y la mala situación financiera que se arrastra desde 2018.

Sostiene que en el mismo vicio a la lógica incurre el fallo al calificar la desvinculación de cientos de trabajadores como una *“una reducción de costos decidida discrecionalmente por la empresa, al margen de las hipótesis objetivas”*, como podrían ser *“eventos ajenos a la voluntad de los contratantes que vienen impuestos por la dinámica de la producción -en lo específico bajas en la misma- y la competitividad -que dice relación con innovaciones tecnológicas y pérdida de negocios-, por hacer referencia sólo a algunos”*, ya que esto resulta contradictorio con el reconocimiento que el propio fallo hace el mal estado de negocios de la empresa, el despido de cientos de trabajadores y una reestructuración que data del año 2018.

Indica que el vicio antedicho se extiende, además, al razonamiento del fallo que cuestiona el despido masivo de



trabajadores por *“valerse del costo más dúctil que se circunscribe al trabajo”*, por sobre reducciones de costos tales *“como serían por ejemplo energía, insumos, etc.”*, concluyendo con un cuestionamiento dogmático respecto a que estos despidos hacen que *“sea el trabajo el que se instrumentaliza para cumplir con la meta económica definida al margen de condiciones objetivas e identificables”*, lo que resulta en una contradicción con el análisis que el propio fallo realiza de la causal de necesidades de la empresa, y que esta tiene carácter objetivo, y que debe fundarse en *“hechos graves, objetivos y demostrables” -al margen de la mera discrecionalidad-, como por ejemplo “bajas en la productividad”, que “deba sostenerse en un periodo razonable de tiempo”*.

Estima que los *“hechos graves, objetivos y demostrables”* que el fallo exige han quedado asentados en la misma sentencia que los desconoce, lo que es incoherente y contradictorio, vulnerando el principio mencionado, ya que no pueden coexistir ambos razonamientos en el mismo fallo.

Argumenta que se infringen también las máximas de la experiencia, atendido que aportó prueba documental y testimonial que acreditaba las pérdidas económicas sostenidas de la empresa, equivocándose la sentenciadora, en cuanto desconoce las motivaciones económicas o financieras, como fundamento de la causal esgrimida, ya que la ley, al referirse a las necesidades de la empresa, no sólo se refiere a las necesidades de carácter técnico, sino que también de orden financiero o económico.

**Segundo:** Que, de la sola lectura de los argumentos utilizados para sostener el presente arbitrio, fluye que existe una discrepancia entre la ponderación que el demandante atribuye a los medios probatorios aportados por él y la valoración que de ellos efectuó la sentenciadora.

Sin embargo, la causal invocada en el presente recurso exige algo más que una mera discrepancia con el raciocinio valorativo de la sentencia. En efecto, se requiere, en primer lugar, que la infracción a las normas sobre valoración de la prueba que se alega, conforme a las reglas de la sana crítica sea manifiesta. Esto significa que el vicio



debe ser notorio, ostensible, capaz de ser percibido a simple vista, lo que no ocurre en la especie.

Resulta relevante en este punto aclarar, que lo sometido a la decisión del tribunal es si se acreditaron los hechos consignados en la carta de despido, y si estos son suficientes para enmarcar la desvinculación del demandante dentro de la causal necesidades de la empresa. Y en relación a este punto, resulta útil recordar que los argumentos levantados para sostener la causal fueron dos, por un lado, una reestructuración específicamente en el área en la que el demandante desempeñaba sus funciones, y por otro, la digitalización de los certificados de revisiones técnicas, lo que habría acarreado la pérdida de ese contrato, haciendo necesaria la desvinculación de trabajadores.

Establecido lo anterior cabe señalar que, efectivamente, en el motivo quinto, el Tribunal da por establecida la merma en los ingresos del demandado y la desvinculación de un número importante de trabajadores. Sin embargo, luego de efectuar el análisis de la prueba aportada al juicio concluye, en el motivo décimo de la sentencia, que *“...la postulación fáctica del despido en la cual se ampara la misiva de desvinculación a juicio de este tribunal es genérica, pues carece de referencia específica necesaria al proceso, en que consiste desde cuando se aplica a base de qué criterio que son denominados objetivos planteados y el por qué se excluía al actor, lo que configura un déficit insalvable en el comportamiento de la garantía formal del despido que configuran las normas del artículo 162, que se circunscribe a la comunicación del despido y 454 N°1 contenido factico mínimo, si además, entendemos que, la única circunstancia fáctica específica en la cual se ampara la misiva de desvinculación, se circunscribe a la pérdida del negocio consistente en las plantas de revisión técnica, negocio en el cual el trabajador no tenía mayor participación, según los dichos de los propios testigos, quienes señalan de manera enfática y categórica que, el actor se desempeñaba en el Departamento de Acuñaamiento de Moneda...”*

Del mismo modo, y continuando con sus razonamientos, el fallo en el motivo undécimo consigna *“..la demandada subordina el*



*despido de cientos de trabajadores a una decisión que, supone alcanzar una meta económica específica de aquello que ha quedado demostrado en la sola observaciones a la prueba respectiva por parte del abogado de la demandada, no expresada esta en sus confines en el proceso, revelada por sus testigos y toda vez que no se alegó déficit de la productividad que no cabe sino inferir, se trata de un objetivo de maximizar las ganancias en el marco de un proceso exitoso de producción...”, para concluir en definitiva que el despido del actor fue improcedente, sin que se advierta en sus razonamientos y conclusiones alguna contradicción que pudiera acarrear la nulidad de la sentencia.*

**Tercero:** En lo tocante a la supuesta infracción a las máximas de la experiencia, debemos especificar, que en este acápite del recurso, bajo el título máximas de la experiencia se hace una serie de afirmaciones relacionadas a la prueba incorporada por el recurrente, para concluir que existía objetiva y técnicamente una necesidad urgente e imperiosa de ajustar sus costos a través de los despidos, sin especificar por qué tal conclusión a la que él llega, sería una máxima de la experiencia, pareciendo ser sus alegaciones, más bien propias de un recurso de apelación, pretendiendo que la Corte sustituya al tribunal de instancia en su facultad exclusiva de ponderación probatoria.

**Cuarto:** Que, en subsidio, invoca la causal del artículo 477, en relación al artículo 161, inciso 1° del Código del Trabajo, en relación con los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728, y al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, por haber sido dictado el fallo con infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Fundamenta la vulneración al artículo 161, inciso 1° del Código del Trabajo en los antecedentes ya invocados respecto de la primera causal, respecto a que se habrían establecido en el fallo hechos que dan cuenta de una situación financiera mermada sostenida de la empresa, por pérdida de negocios, que llevó a desvincular a cientos de trabajadores, lo que fue acreditado por vía documental y testimonial, demostrando con cifras que la empresa se encuentra en



crisis y en un estado inviable, configurándose en consecuencia la causal en comento, la que tiene un carácter objetivo, fundada en aspectos de carácter técnico o económico, no obstante lo cual el fallo infringe la norma en cuestión al establecer como improcedente el despido del actor.

En subsidio, respecto a la contravención de los artículos 163, 168 y 169 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728, indica que no procedía ordenar la devolución del monto del aporte del empleador al seguro de cesantía que fue imputada de la indemnización por años de servicios pagada al actor, ya que las últimas normas citadas regulan en conjunto la procedencia de esta imputación cuando se despide a un trabajador por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, como ocurre en la especie, no existiendo una exigencia legal respecto de que la causal no sea declarada improcedente por la judicatura para que proceda este descuento.

Finalmente, estima que la condena en costas que se le impuso, en la suma de \$500.000, contraviene lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la condena en costas procede cuando la parte ha sido totalmente vencida en un juicio o incidente, lo que no ocurrió en la especie.

**Quinto:** Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

**Sexto:** Que, en el presente caso, el recurrente no especifica de qué modo se habría infringido el artículo 161 del Código del Trabajo, limitándose a disentir de las conclusiones a las que arribó la sentenciadora, cimentándola en argumentos muy similares a los que utiliza respecto de la causal de infracción manifiesta de las normas de apreciación de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, y no a argumentos de derecho, achacándole a la sentenciadora una serie de



hechos que supuestamente se habrían establecido en el fallo, cuestión que al tenor de la sentencia no resulta del todo precisa.

Así por ejemplo, se menciona como un hecho asentado, la pérdida de otros contratos diferentes del que se menciona en la carta de despido, circunstancia que habría sido incorporada por los testigos que depusieron en estrados. Sin embargo, en relación a esta cuestión, si bien la falladora la menciona, es únicamente con el afán de indicar que no pueden ser valorados para justificar la causal, puesto que no estaban especificados en la carta despido, siendo improcedente incluir hechos que no se consignó en aquella.

**Séptimo:** Que, respecto a la contravención de los artículos 163, 168 y 169 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728, cabe señalar que el citado artículo 13 de la Ley N° 19.728, establece que: *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios...”*, agregando el inciso segundo que *“se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía...”*.

A su turno, el artículo 52 de la misma ley, en su inciso segundo, luego de reconocer el derecho del trabajador a disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, si éste ha accionado por despido injustificado, indebido o improcedente, o por despido indirecto conforme al artículo 171 del Código del Trabajo, agrega que *“Si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13”*.

**Octavo:** Que del tenor de las reglas antes transcritas y una interpretación armónica de ambas, se desprende, que para que opere el beneficio reclamado, es necesario que el descuento del saldo de la cuenta individual del trabajador por cesantía, lo haya sido en virtud de la causal de despido por necesidades de la empresa, ya sea porque no se discutió o porque así se determinó en sede judicial.

Por ende, si el trabajador recurrió a la justicia para que se pronuncie sobre la validez de esa causal de término de los servicios, en relación con el recargo legal del 30% de la indemnización por años



de servicios y de la restitución de esos fondos descontados en el finiquito, los efectos que se derivan de aquella pretensión quedan en suspenso hasta la decisión jurisdiccional.

Ahora bien, si el juez determina que no se han probado debidamente las necesidades de la empresa para despedir al trabajador, y declara que el despido de éste es injustificado o improcedente -como ocurre en la especie - no puede tener lugar la imputación referida en el inciso segundo del artículo 13 precitado, ya que esa deducción está sujeta a la condición de haber operado efectivamente la causal de necesidades de la empresa.

Admitir lo contrario significaría que la decisión jurisdiccional, en cuanto declara injustificado o improcedente el despido, carece de eficacia, lo que es un evidente contrasentido, ya que al no haber operado la causal invocada por el empleador para despedir al trabajador, los efectos que pudiera haber generado ese término de servicios deben retrotraerse a su estado anterior, razón por lo que es del todo procedente restituir el dinero que se ha descontado indebidamente al trabajador y al resolverlo de este modo la jueza del fondo ha concluido conforme a derecho.

**Noveno:** Finalmente, en lo que dice relación a la presunta vulneración al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, si bien es cierto, según se dispone en el artículo 432 del código laboral resultan aplicables, supletoriamente, los Libros I y II del mencionado código, esto es únicamente en los temas que no se encuentran regulados en el Código del Trabajo. Sin embargo, en lo relativo a las costas existe una norma propia en materia laboral, esto es, el artículo 459 en su número 7, en el cual se dispone, que dentro del contenido de la sentencia definitiva deberá estar “7.- *El pronunciamiento sobre el pago de las costas y, en su caso, los motivos que tuviere el tribunal para absolver de su pago a la parte vencida.*”

Así, las cosas, si lo pretendido era objetar la condena en costas, la norma que debía invocarse era la del código laboral y no la supletoria, puesto que aquella, en el presente caso, no resulta aplicable, en consecuencia, el presente recurso se interpuso en contra de la norma equivocada, razón por la cual será rechazado.





En razón de todo lo anterior, es que el presente recurso, necesariamente, debe ser rechazado por carecer de fundamentos.

Por estas consideraciones, más lo previsto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad, interpuesto por la demandada **Casa de Moneda de Chile S.A.**, contra la sentencia de veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT O – 6822 - 2019, la que, en consecuencia, **no es nula**.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra interina Pamela Quiroga Lorca.

**Laboral-Cobranza N° 2083-2020**

Pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por la Ministra señora Inelie Durán Madina e integrada por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y la Ministra (I) señora Pamela Quiroga Lorca. No firma la Ministra (S) señora Poza, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber expirado su suplencia.

En Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Inelie Duran M. y Ministra Suplente Pamela Del Carmen Quiroga L. Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

